


6,35
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

26.º de 193 países

9.º de 35 países americanos

5.º de 12 países de América del Sur



MERCADOS CRIMINALES 6,20

TRATA DE PERSONAS 7,00

TRÁFICO DE PERSONAS 6,00

TRÁFICO DE ARMAS 5,50

DELITOS CONTRA LA FLORA 7,00

DELITOS CONTRA LA FAUNA 5,50

DELITOS CONTRA LOS RECURSOS NO RENOVABLES 9,00

COMERCIO DE HEROÍNA 3,50

COMERCIO DE COCAÍNA 9,00

COMERCIO DE CANNABIS 5,50

COMERCIO DE DROGAS SINTÉTICAS 4,00



ACTORES CRIMINALES 6,50

GRUPOS DE TIPO MAFIOSO 6,00

REDES CRIMINALES 8,00

ACTORES INTEGRADOS EN EL ESTADO 7,00

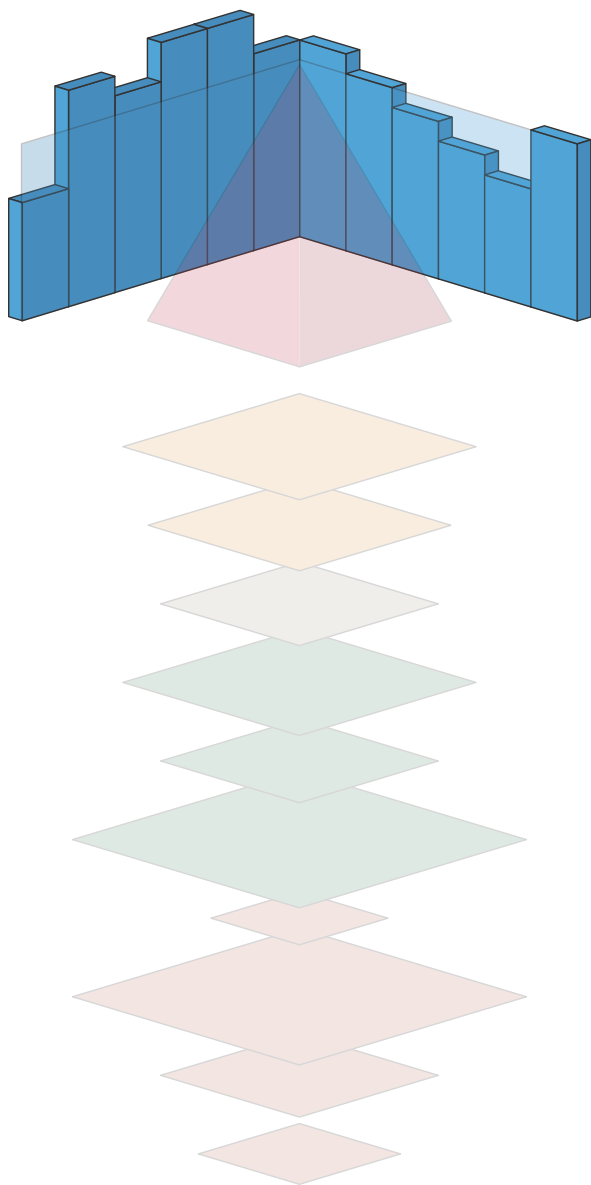
ACTORES EXTRANJEROS 5,00


4,58
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

106.º de 193 países

23.º de 35 países americanos

8.º de 12 países de América del Sur



4,58
PUNTUACIÓN DE RESILIENCIA

106.º de 193 países
23.º de 35 países americanos
8.º de 12 países de América del Sur

LIDERAZGO POLÍTICO Y GOBERNANZA	3,00
TRANSPARENCIA GUBERNAMENTAL Y RENDICIÓN DE CUENTAS	5,50
COOPERACIÓN INTERNACIONAL	5,00
POLÍTICAS Y LEYES NACIONALES	6,00
SISTEMA JUDICIAL Y DETENCIÓN	6,00
CUERPOS DE SEGURIDAD	5,00
INTEGRIDAD TERRITORIAL	5,00
LUCHA CONTRA EL LAVADO DE DINERO	4,50
CAPACIDAD DE REGULACIÓN ECONÓMICA	4,00
APOYO A VÍCTIMAS Y TESTIGOS	3,50
PREVENCIÓN	3,00
ACTORES NO ESTATALES	4,50

6,35
PUNTUACIÓN DE CRIMINALIDAD

26.º de 193 países
9.º de 35 países americanos
5.º de 12 países de América del Sur

 MERCADOS CRIMINALES	6,20
 ACTORES CRIMINALES	6,50



Financiamiento proporcionado por el Gobierno de los Estados Unidos.



ENACT es un programa financiado por la Unión Europea e implementado por el Instituto de Estudios de Seguridad e INTERPOL, en asociación con The Global Initiative Against Transnational Organized Crime (la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, GI-TOC).

CRIMINALIDAD

MERCADOS CRIMINALES

PERSONAS

Perú es un país de origen y destino de la trata de personas, principalmente para la explotación sexual y laboral, y en menor medida para la adopción de niños y el tráfico de órganos. La mayoría de las víctimas son peruanos sometidos a la trata fuera del país y ciudadanos extranjeros, particularmente de Venezuela y Colombia, traídos al país con falsas ofertas de empleo. La trata de personas, incluyendo la explotación laboral, también ocurre alrededor de operaciones de minería ilegal, porque las áreas tienden a estar aisladas y carecen de la presencia del Gobierno. El mercado está dirigido por organizaciones criminales locales que trabajan en colusión con funcionarios gubernamentales corruptos y, en algunos casos, en asociación con actores extranjeros.

Perú también es un punto de tránsito para el tráfico de personas, incluyendo migrantes de Haití y Senegal que viajan a Brasil y personas de República Dominicana que intentan llegar a Chile. La afluencia de migrantes venezolanos, que había ido en aumento en los últimos años, ha disminuido desde la pandemia de la COVID-19. El tráfico lo realizan en gran parte personas vinculadas a empresas de transporte terrestre.

TRÁFICO

Perú es un punto de tránsito de armas ilegales provenientes de Estados Unidos y México con destino a Colombia, y el mercado está estrechamente vinculado a la producción y el comercio de drogas. En el país también existe un mercado gris de armas de fuego pequeñas, municiones y proyectiles, en su mayoría robados o comprados a funcionarios corruptos de los cuerpos de seguridad. Este mercado ilícito también es donde obtienen armas los grupos terroristas que operan en el país.

MEDIOAMBIENTE

Una parte muy considerable del comercio de madera de Perú es ilegal y representa gran parte del mercado de los delitos contra la flora del país, que incluye la extracción ilegal de madera local y el envío de madera de Colombia, Brasil y Ecuador a la región amazónica para transportarla a países como México y Estados Unidos. El aumento de la corrupción oficial y la falta de controles, regulaciones y capacidad gubernamental eficaces para hacer cumplir las leyes facilitan este mercado ilegal. El tráfico de fauna también es sustancial en Perú, donde la mayoría de las especies satisface la demanda local y extranjera y el mercado es controlado por una combinación de redes criminales nacionales e internacionales favorecidas por políticas indulgentes. Las especies traficadas incluyen aves como el periquito aliblanco y el guacamayo verde, que se

venden como mascotas; animales más grandes como osos andinos, vicuñas, monos y varios felinos, que se venden por carne; y otras especies, incluyendo reptiles y anfibios, vendidos con fines medicinales o para la industria de la moda. Además, existe una considerable pesca ilegal.

Como principal productor de oro de la región, la extracción ilegal de oro es un mercado criminal clave en Perú, particularmente en las regiones fronterizas con Brasil, Bolivia y Ecuador, con exportaciones dirigidas principalmente a Estados Unidos y Europa. El sector de la extracción ilegal de oro está controlado por una combinación de mineros locales, intermediarios, poderosas redes familiares, grupos armados extranjeros y políticos.

DROGAS

Las autoridades han informado de la existencia de algunas plantaciones de amapola en zonas remotas de Perú, y el opio se exporta principalmente a Ecuador y Colombia para convertirlo en heroína. El mercado local de heroína es muy limitado. Por otra parte, Perú es el segundo mayor productor de cocaína del mundo, con clanes familiares locales que gestionan la logística y trabajan junto a mafias serbias, mexicanas y colombianas recibiendo la ayuda de funcionarios corruptos para atender principalmente al comercio internacional, ya que el consumo interno es muy limitado. Algunas de las rutas principales pasan por México hacia el mercado estadounidense y por Brasil hacia el mercado europeo, y algunos envíos se hacen directamente a Oceanía y Japón. Las autoridades permiten el cultivo controlado de hoja de coca en algunas áreas del país, y si bien están haciendo esfuerzos por erradicar manualmente las plantaciones ilegales de coca, no parecen abordar toda la extensión del mercado.

En cuanto al cannabis, el cultivo, transporte y venta de cannabis medicinal es legal en el país, y pequeñas redes criminales atienden el mercado ilegal local. El Gobierno también se está enfocando en erradicar los cultivos ilegales en todo el país. Perú es un punto de tránsito para las drogas sintéticas y el mercado está dirigido por redes criminales informales que destinan el producto principalmente a Chile y también a un pequeño mercado de consumo local.

ACTORES CRIMINALES

Las organizaciones criminales en Perú tienden a ser relativamente pequeñas, operan localmente y oscilan entre grupos de tipo mafioso y redes criminales, siendo la más activa Sendero Luminoso, una organización armada con acceso considerable a armas y vinculada al tráfico de drogas y otras actividades criminales. Otras organizaciones similares tienden a especializarse en mercados criminales específicos, como el tráfico de madera y drogas, y tienen una fuerte presencia

y control en áreas criminalmente estratégicas con un limitado alcance gubernamental. El país también alberga redes criminales informales que controlan mercados específicos en coordinación con individuos contratados y poderosos grupos internacionales.

Las organizaciones criminales están profundamente arraigadas en las instituciones peruanas, en las que decenas de funcionarios, incluyendo miembros de los cuerpos de

seguridad, parlamentarios e incluso jueces, están bajo investigación por brindar seguridad para el transporte de bienes ilícitos o protección a criminales. Además, en Perú también operan varios grupos criminales internacionales prominentes, como mafias colombianas y mexicanas que históricamente han controlado el mercado del tráfico de cocaína, y actores de países como Brasil, Ecuador, Venezuela, Serbia e Italia, que participan en diversas actividades criminales.

RESILIENCIA

LIDERAZGO Y GOBERNANZA

Perú sufre de altos niveles de corrupción que llegan a los más altos niveles del Gobierno y afectan seriamente la gobernanza. Esto se refleja en los cambios que han estado ocurriendo en el Poder Ejecutivo durante los últimos dos años, período en que varios presidentes han enfrentado cargos relacionados con la administración de contratos estatales, soborno y lavado de dinero, y se encuentran bajo investigación, tras las rejas o huyendo de la justicia. Algunas autoridades a nivel regional, incluyendo alcaldes provinciales, también han sido acusadas de delitos que incluyen colusión con traficantes de drogas y madereros ilegales. Si bien las buenas políticas públicas y un aumento presupuestario para fortalecer la capacidad judicial y de los cuerpos de seguridad parecen reflejar, en teoría, un interés oficial en combatir el crimen organizado, la corrupción sigue siendo un problema importante.

El país parece tener un marco legal relativamente sólido para combatir el crimen organizado, que incluye la incautación de activos, pero no cubre el comercio ilegal de flora y fauna silvestres. Perú ha suscrito la mayoría de los tratados y convenios internacionales pertinentes relacionados con el crimen organizado y tiene acuerdos de extradición con varios países de la región. Aunque estos acuerdos han sido probados en varios casos de alto nivel, algunas de las otras leyes no se implementan con tanta eficacia y el Poder Judicial parece centrarse únicamente en los casos de alto nivel.

JUSTICIA PENAL Y SEGURIDAD

El Poder Judicial de Perú está conformado por una red de tribunales que incluye un tribunal especializado en crimen organizado y corrupción a manos de funcionarios gubernamentales. Si bien el sistema judicial peruano ha tenido un éxito relativo a la hora de manejar casos de alto nivel, ha sido bastante lento e ineficaz con los casos de bajo perfil. Los cuerpos de seguridad también cuentan con órganos especializados en crímenes complejos, al igual que el Ministerio Público, que ha tenido cierto éxito, especialmente en los casos que involucran a altos funcionarios del Gobierno. El sistema

penitenciario sufre de algunos de los problemas comunes al resto de la región, y el hacinamiento es el más grave de ellos.

En términos territoriales, la idoneidad de Perú para el cultivo de la hoja de coca y las vastas áreas sin presencia gubernamental hacen del país un centro estratégico para el comercio internacional de cocaína, lo que permite que la escena criminal se desarrolle y prospere. Su ubicación en la frontera con el gran mercado interno de Brasil y las rutas internacionales también lo convierten en un lugar particularmente útil para las organizaciones criminales.

ENTORNO ECONÓMICO Y FINANCIERO

Perú ha realizado importantes mejoras en los últimos años en lo que se refiere a las instituciones, leyes, cooperación, credibilidad de los operadores y otros aspectos relacionados con la lucha contra el lavado de dinero, que incluyen la implementación de un plan nacional en la materia. También se ha informado que la Unidad de Inteligencia Financiera del país ha congelado millones de dólares en fondos sospechosos. A pesar de esto, dichos fondos continúan fluyendo a través de los bancos locales y se cree que el país todavía presenta un alto riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Las actividades de los grupos criminales, particularmente en el norte del país, han contribuido al crecimiento de la economía local, pero también han abierto la puerta al desarrollo de crímenes como la extorsión, lo que hace que muchas áreas del país no sean particularmente favorables para los negocios.

SOCIEDAD CIVIL Y PROTECCIÓN SOCIAL

En los últimos años, las autoridades de Perú han intensificado sus esfuerzos por identificar y proteger a las víctimas de la trata de personas, lo que incluye brindar asistencia a las víctimas y protección a los testigos a través de la legislación nacional y una red de refugios. Sin embargo, todavía existen problemas, especialmente en cuanto a la disponibilidad de recursos. Perú también cuenta con organizaciones de la sociedad civil dinámicas, aunque, en algunas áreas, la falta

de protección ha puesto en alto riesgo la vida de muchos activistas, en particular aquellos que trabajan para proteger el medio ambiente. Además, a pesar de la existencia de una amplia gama de medios de investigación independientes, los periodistas que cubren conflictos sociales o ambientales, exponen casos de corrupción o investigan la influencia de los traficantes de drogas en las instituciones estatales corren el riesgo de disuasión legal o represiones más duras.

Este resumen fue financiado en parte por una subvención del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Las opiniones, hallazgos y conclusiones expresados en este documento pertenecen a los autores y no reflejan necesariamente los del Departamento de Estado de los Estados Unidos.